LA EVALUACIÓN PSICOPATOLÓGICA ÓPTIMA EN EL DERECHO PROCESAL

FECHA DE ENVÍO: 2 DE FEBRERO DE 2022 - FECHA DE ACEPTACIÓN: 20 DE ABRIL DE 2022

**José Manuel
Bertolín Guillén**

Doctor y Licenciado en Medicina y Cirugía; Médico Esp. Psiquiatría; Ldo. en Psicología. Práctica profesional propia. Jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental (retirado). Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Generalitat Valenciana.

**Francisca
Cantero Araque**

Licenciada en Psicología; Psicóloga Esp. Psicología Clínica; Lda. en Criminología. Responsable Unidad de Salud Mental Infantil y de la Adolescencia del H. Dénia MarinaSalud. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Generalitat Valenciana.

**Pilar
Colilla Rubio**

Licenciada en Filología Anglogermánica; Coach profesional; Educadora social. Práctica profesional propia.

SUMARIO

I. Introducción.

II. Material y método.

III. Resultados y discusión. 1. Intervención forense médica y psicológica. 2. Procesamiento judicial de personas discapacitadas. 3. Intrusismo profesional en la conjunción entre salud mental y derecho.

IV. Conclusiones.

V. Bibliografía.

RESUMEN

En el campo de la salud cualquier facultativo sanitario (como son los médicos psiquiatras y los psicólogos clínicos) tienen que poder acreditar formación y experiencia específicas y destacadas para poder ser considerados expertos titulares. Proponemos que también sea necesario considerar mejor la formación y adiestramiento oficiales exigibles a los facultativos sanitarios peritos ante la Administración de Justicia. En el concreto ámbito psicopatológico el objetivo ha de ser lograr las mejores intervenciones, evaluaciones y diagnósticos clínicos periciales pertinentes, de tanta repercusión para el mundo del Derecho, así como evitar el intrusismo.

PALABRAS CLAVE

Acreditación; Administración de Justicia; Ámbito sanitario; Análisis jurisprudencial; Asistencia sanitaria; Medicina legal; Psicología; Psiquiatría; Salud mental.

ABSTRACT

For the health field, psychiatrists and clinical psychologists have to be able to prove the specific outstanding education and experience in order to be considered official certified experts. We propose that it will also be necessary to better consider the required valid official education and training for the expert physicians before the Administration of Justice. Regarding the more specific psychopathological field, the aim must be to obtain the best pertinent expert clinical interventions, assessments and diagnoses -which have so many repercussions on the world of law- as well as to avoid unqualified or illegal practice.

KEYWORDS

Accreditation; Administration of Justice; Health field; Jurisprudence analysis; Health assistance; Legal medicine; Psychology; Psychiatry; Mental health.

1. INTRODUCCIÓN

La ciencia forense es tan fundamental como compleja para la Administración de Justicia. Hay escasa información basada en estudios pertinentes acerca de los servicios forenses realizados sobre la salud mental de las personas. Los médicos con la especialidad de psiquiatría intervienen habitualmente en España en el derecho civil, penal, de familia, laboral y penitenciario. Los psicólogos en su relación con el derecho colaboran por lo común en los ámbitos clínico y experimental no clínico.

El derecho procesal es una rama del ordenamiento jurídico que rige la actuación de los órganos jurisdiccionales y de las partes. Usualmente las tasas de trastornos mentales entre los delincuentes son elevadas. En buena lógica, entre los peritos facultativos judiciales de oficio o de parte, en el dominio psicopatológico sería recomendable que actuasen con preferencia quienes ostenten la especialización postgrado oficial y técnica superior por parte del Estado en psiquiatría o en psicología clínica. En efecto, además de la objetividad plena, se requiere el conocimiento experto máximo del perito.

De modo paradójico, en los juzgados de menores, de lo social, de familia y en otros, incluyendo los de vigilancia penitenciaria, hasta ahora suelen intervenir con pronunciamientos sobre el estado mental de algún sujeto médicos que no son especialistas psiquiatras titulados y psicólogos que tampoco son especialistas clínicos titulados¹. Todos ellos carecerán de la capacitación estatal oficial adecuada y específica para la práctica asistencial en el sector público en el terreno de la salud mental.

1 Para considerar las titulaciones que son oficiales nos basamos en el Real Decreto (RD) 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación. Dicho ministerio asumió entre 2018 y 2020 la ejecución de la política gubernamental en materia de universidades, investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en cualquier sector. En el RUCT constan los títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional. Este Registro se fundamenta en el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, y que derogó el anterior RD 1282/2002, de 5 de diciembre, por el que se regulaba el Registro Nacional de Universidades, Centros y Enseñanzas.

Vease también la línea estratégica n.º 9 sobre “formación” en la nueva estrategia española de salud mental 2022-2026, aprobada recientemente por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Se promueve en ella explícitamente la “formación específica” de los diferentes profesionales del ámbito de la salud mental.

2. MATERIAL Y MÉTODO

Estudio sucinto observacional y crítico de la cuestión, principalmente en los ámbitos nacionales de salud y jurisprudencial. Se han revisado, sin pretensiones de exhaustividad, las literaturas científica y legal relevantes más recientes, internacionales y específicas de nuestro país.

Nos proponemos con la presente aportación ayudar y contribuir a esclarecer ante la Administración de Justicia qué clase de profesionales de la salud y, por tanto, qué grado de cualificación técnica es la más idónea para realizar cualquier tipo de pericial psíquica *ad hoc*.

En síntesis, planteamos establecer quiénes estarán mejor preparados y capacitados para la óptima determinación pericial de la capacidad mental de las personas evaluadas según sea la finalidad del tribunal de justicia. No es intención de los autores proponer soluciones sino solo recalcar el estado actual del asunto en España.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 Intervención forense médica y psicológica

Los trastornos mentales se reconocen cada vez más como las principales causas de carga mundial de morbilidad. El *Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2019*, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha mostrado que los trastornos mentales han permanecido entre las diez principales causas de morbilidad en todo el mundo, sin reducción global desde 1990.²

La prevalencia de trastornos mentales en la población general española es asimismo considerable y es común que se arguyan ante la Administración de Justicia. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud de España 2017,³ realizada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y el Instituto Nacional de Estadística, más de una de cada diez personas de 15 y más años refirió haber sido diagnosticada de algún “problema” de

2 GBD 2019 MENTAL DISORDERS COLLABORATORS. Global, regional, and national burden of 12 mental disorders in 204 countries and territories, 1990–2019: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *Lancet Psychiatry*. 2022;9(2):137–50. Ver asimismo el documento de 1996, en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/41864/0965546608_eng.pdf

3 En: https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2017/ENSE17_pres_web.pdf

salud mental: el 10,8%. Pero un problema no es equivalente a un trastorno, sea mental o no.

En la sanidad pública española, la regulación vigente exige al profesional en ejercicio que posea la titulación oficial reconocida por el Estado adecuada a la faceta de intervención que corresponda. Específicamente en el terreno de la salud mental es requisito estar en posesión de los títulos oficiales de médico especialista en psiquiatría, de psicólogo especialista en psicología clínica o de enfermero especialista en salud mental. La colaboración entre estas profesiones tiene el potencial de aumentar tanto la credibilidad como la utilidad de los servicios facultativos sanitarios forenses ante los tribunales.

Sin embargo, en el entorno de la Administración de Justicia, cuando se abordan asuntos de salud mental no es inusual que se consideren igual de competentes profesionales de otros ámbitos y que, con cierta frecuencia, no ostentan la especialización sanitaria oficial pertinente. Las cuestiones legales tienen gran impacto en las personas evaluadas psicopatológicamente y también en la sociedad en general. Cada vez se reconoce más la necesidad de que participe necesariamente un médico psiquiatra en la realización del oportuno examen mental forense con arreglo a las normas jurídicas internacionales.⁴

Las periciales se consideran elementos probatorios de carácter personal para los tribunales de justicia.⁵ Las periciales médicas y psicológicas de cualquier tipo representan aplicaciones jurídicas de los saberes y destrezas correspondientes. Un perito suele ser sinónimo de experto en alguna materia, pero si además quiere ser científico tendrá que saber y poder discernir el mejor conocimiento que esté debidamente acreditado por la ciencia en un área determinada.

En ocasiones resultará de importancia crucial la historia clínica previa del peritado, dado su carácter de prueba preconstituida en los procesos judiciales. Es obligatorio que el historial clínico sea cumplimentado por cuantos profesionales de la salud hayan intervenido en la asistencia. Véase el art. 2.6, Capítulo I, de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y

4 Así es como algunos autores acaban de proponerlo en los países europeos de Ucrania y Georgia. Véase: KRAVCHUK, O., NALUTSYSHYN, V., BALAN, M., OSMOLIAN, V., DOMBROVSKA, E. Правовой статус эксперта-психиатра при производстве судебно-психиатрической экспертизы. Медицинские Новости Грузии. [El estatus legal de un perito psiquiatra durante una pericia psiquiátrica forense.] Georgian Med News. 2021;(319):152-60.

5 BERTOLÍN-GUILLÉN, J.M. Las especialidades facultativas del ámbito de la salud mental ante los tribunales de justicia. Gac Int Cienc For. 2021;[11](40):33-42.

de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica.⁶

Como es sabido, los denominados médicos forenses, en tanto que son facultativos del cuerpo especial de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, son también funcionarios de carrera que trabajan en los servicios de medicina legal y ciencias forenses y que colaboran en numerosos tipos de causas. Constituyen un cuerpo nacional de titulados superiores al servicio de esa Administración.⁷

La misión de los funcionarios médicos forenses es auxiliar técnicamente a juzgados, tribunales, fiscalías y oficinas del registro civil mediante los dictámenes y periciales oportunos. En materia de salud mental todos los peritos postulan explícitamente como norma hallarse convenientemente capacitados y ser técnicos y objetivos, lo que, por otra parte, es esperable de cualquier profesional de la salud. Pero un funcionario médico forense no tiene por qué ser también experto especialista debidamente titulado y formado como psiquiatra o psicólogo clínico.

La especialidad oficial propiamente dicha de medicina legal y forense existe en España solo desde el año 2022 en curso. Los primeros auténticos especialistas sanitarios reconocidos así por el Estado, además de los que sean convalidados, lo serán dentro de cuatro años, que es lo que durará esa formación por la vía del médico-interno-residente o MIR. La creada nueva especialidad oficial depende a partir de ahora de tres ministerios: Sanidad, Educación y Justicia, y en su caso de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los necesarios trasposos competenciales.

Por su parte, para ser psicólogo forense en España el único requisito legal es estar en posesión del título de licenciado o graduado en psicología. La psicología forense tampoco es una especialidad oficial sino un área de trabajo que no tiene regulación alguna.⁸ De modo que esta supuesta especialidad no existe con carácter estatal y aún menos la más específica de psicología clínica forense, como tampoco existe la especialidad médica oficial en psiquiatría forense.

6 GARCÍA-MILLÁN, A. El valor probatorio de la historia clínica como documento público. Derecho y Salud. 2019;29(1):145-54.

7 Véase al respecto la Ley Orgánica (LO) 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, Libro VI, arts. 470 sigs., reformada por la LO 16/1994, de 8 de noviembre. También puede consultarse el RD 296/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses, que deroga al antiguo Decreto 2555/1968, de 10 de octubre.

8 Véase la resolución 19979, Boletín Oficial del Estado (BOE) de 6 de agosto de 1991.

Sin embargo, el Consejo General de la Psicología de España (CGPE) ha establecido por su cuenta la Acreditación Nacional de Psicólogo Experto en Psicología Jurídica y/o Psicología Forense. Pero, entiéndase que como refirió en 2021 la Comisión Nacional de Acreditación Profesional, que forma parte del CGEP, sus certificaciones de títulos no están regladas por las Administraciones Públicas y, por tanto, carecen de consecuencias y efectos jurídicos.⁹

Desde finales de 2021 hay un total de cincuenta especialidades médicas reconocidas por el Estado español, distribuidas en quirúrgicas, médico-quirúrgicas, de laboratorio y clínicas. De todas ellas, solo dieciocho, incluyendo la psiquiatría, cuentan con coordinación total entre los veintisiete países miembros de la Unión Europea (UE).¹⁰ Para el amplio campo de la psicología solo existe en nuestro país la especialidad oficial de la psicología clínica, inexistente en el resto de Europa. La psicología general sanitaria, en particular, es una profesión titulada y regulada también únicamente en España, pero sin el carácter de ser una especialidad de las ciencias de la salud.^{11,12,13}

El conocimiento científico claro no se define por lo que se estudia sino por cómo se estudia. Para el ámbito de la salud mental esto ha de incluir entre los facultativos necesariamente a los especialistas titulados en psiquiatría o en psicología clínica. Cualquiera psicólogo, igual que cualquier médico, puede considerarse tácitamente más experto en algún área o dominio concreto, o haber sido reconocido como tal por centros o instituciones públicas y privadas de todo tipo. Sin embargo, esos reconocimientos no son equiparables a los otorgados por el Estado para ejercer en la sanidad pública, que son explícitos y se constatan con la titulación de las especialidades oficiales.

⁹ Véanse las declaraciones del secretario general del CGPE, en: <https://www.acreditaciones.cop.es/> Ver también: https://www.infocop.es/view_article.asp?id=19549 (Infocoponline, 2021).

¹⁰ En España, el recién creado título de médico especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia, RD 689/2021, de 3 de agosto, ya existía en todos los países de la UE, salvo Bulgaria, y ahora tendrá que coordinarse con ellos.

¹¹ La titulación en psicología general sanitaria, que es distinta de la psicología clínica, resulta particularmente útil en la atención primaria del sector público de la salud en sus intervenciones acerca de la asociación entre factores psicológicos generales y la búsqueda reiterada de asistencia o ayuda profesional.

¹² HAJEK, A., BOCK, .JO., KÖNIG, H.H. Association of general psychological factors with frequent attendance in primary care: A population-based cross-sectional observational study. *BMC Fam Pract.* 2017;18:48.

¹³ Ibid. BERTOLÍN-GUILLÉN, J.M. Las especialidades facultativas del ámbito de la salud mental ante los tribunales de justicia. *Gac Int Cienc For.* 2021;[11](40):33-42.

Cuando un funcionario médico forense adscrito a un servicio de medicina legal y forense dictamine en un acto jurídico, estará ejerciendo en el terreno característico de la Administración de Justicia, no en el de la sanidad. Ahora bien, en tales actos jurídicos se solaparán las capacitaciones y destrezas en salud y la propiamente jurídica, y en esa imbricación es donde verdaderamente subyace el problema de la especialización técnica que sea óptima y necesaria.

A su vez, cuando un psiquiatra ejerza como perito forense en un acto judicial no estará realizando una actividad sanitaria sino jurídica y, por tanto, estará sujeto a los requisitos de idoneidad que establezca la Administración de Justicia. En términos de salud, los actos facultativos más importantes son el diagnóstico y tratamiento, funciones que no deberían ejercer usualmente los médicos funcionarios forenses si no cumplieran también con los requisitos de estar en posesión del preceptivo título oficial sanitario de ser especialista reconocido por el Estado en el campo que abordan.

Para la psicología en concreto, en el resto de la UE no hay establecidas especialidades ni subespecialidades admitidas en las leyes correspondientes, aunque existen numerosos matices diferenciadores según países. Hay propuestas integradoras como *EuroPsy*, pero que no están materializadas. Otras instituciones y proyectos, principalmente en nuestro país y tan poco realistas como ilusorios, pretenden otorgar por defecto carácter sanitario al conjunto del dilatado campo de la licenciatura o grado en psicología general.^{14,15}

La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, establece quiénes tienen la consideración de profesionales sanitarios en nuestro país. Algunos estiman que la psiquiatría y psicología “forenses” son verdaderas subespecialidades facultativas aplicadas al derecho, e incluso que ostentarían una ética particular.¹⁶ En consecuencia, para esas personas equivaldría a decir que en el específico ejercicio forense han de existir superespecialistas. La realidad, y a diferencia de otros países, es que en España para el campo de la medicina tampoco existen súper o subespecialidades oficiales estatales, lo mismo que sucede para el grado de psicología.

¹⁴ REDACCIÓN INFOCOPONLINE. “Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. La licenciatura en psicología es una profesión sanitaria. Sinopsis.”. 2006;(26).

¹⁵ Lo así pretendido y manifestado por el citado Consejo General está en desacuerdo frontal con la anterior Ley española 44/2003, art. 6.3. de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.

¹⁶ NIVEAU G, WELLE I. Forensic psychiatry, one subspecialty with two ethics? A systematic review. *BMC Med Ethics.* 2018;19(1):25.

En el dominio de lo mental, puede comprobarse con facilidad que es muy numerosa e indiscriminada la exhibición de títulos adicionales, supuestas especialidades accesorias y sub o super especialidades. En efecto, suele publicitarse con completa normalidad estar en posesión de titulaciones que supuesta y pretendidamente habilitan para las pruebas periciales o experticias, como son la de “experto universitario en psicología forense para médicos”, “experto universitario en salud mental”, “experto universitario en psicología jurídica y forense”, “experto en la elaboración de informes y peritajes psiquiátricos y psicológicos”, etc.

También se presentan con frecuencia títulos de que el profesional implicado está cualificado por variados cursos y otras categorías posgrado en psicología, en medicina y concretamente en psiquiatría. La mayoría de cursos posgrado de experto o especialista universitario suelen comportar únicamente títulos propios de las entidades que los emiten. Sin embargo, no deben confundirse con las titulaciones oficiales, que son las reconocidas por el Estado español y en otros muchos países de la UE.

Las especialidades oficiales de psiquiatría y psicología clínica tienen evidentes e importantes connotaciones legales, tanto en su práctica asistencial como forense-pericial ante los tribunales de justicia. En efecto, como es bien conocido,¹⁷ según la Ley los profesionales que actúen como peritos habrán de acreditar una formación, capacitación, conocimiento y experiencia específicas en el ámbito técnico de que se trate.¹⁸

Se puede consultar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrím) de 1882, actualizada en 2015. En sus arts. 457 sigs., capítulo VII del informe pericial, establece que son peritos titulares los que tienen título oficial de una ciencia o arte cuyo ejercicio esté reglamentado por la Administración. Los peritos no titulares son los que, careciendo de título oficial, tienen, sin embargo, conocimiento o práctica especiales.

Pero la LECrím no establece específicamente la necesidad de ostentar en cada caso las especialidades oficiales que correspondan. Por lo tanto, estar únicamente en posesión de los títulos de licenciado en medicina o en psicología podría eventualmente ser considerado por la Administración de Justicia

17 SUBIJANA, I.J., ECHEBURÚA, E. El conflicto de roles con respecto a la prueba pericial psicológica en el proceso judicial. *Anu Psicol Jurídica*. 2022;32(1):107–14.

18 Para mayores concreciones puede consultarse el capítulo VI, sección 5.ª sobre el dictamen de los peritos del título I, libro II, arts. 335 sigs. de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC).

suficiente para las evaluaciones y dictámenes psicopatológicos periciales. Nuestra LECrím contempla, además, la pericia como una obligación, por lo que nadie puede negarse a acudir al llamamiento judicial, salvo excusa probada y aceptada.

En el ámbito de lo mental en su relación con la Justicia los peritos habitualmente habrán de pronunciarse acerca de sutiles pero importantes realidades subjetivas de los peritados en lo que respecta, de modo principal, a sus estados cognoscitivos, volitivos y juicio de la realidad. Por ello, tal como recoge la misma Ley, han de preferirse los peritos titulares (art. 458). Estos, al menos en teoría, serán menos influenciados por ideologías propias o ajenas que a veces podrían explicar las diferencias, contradicciones o réplicas entre varios informes y dictámenes técnicos¹⁹ sobre el mismo asunto.²⁰

3.2 Procesamiento judicial de personas discapacitadas

Resulta muy problemático juzgar penalmente con equidad a las personas que se encuentran privadas de capacidad procesal.²¹ En Australia, por ejemplo, el sistema de justicia penal es bastante heterogéneo y fragmentado en cuanto al enfoque judicial relacionado con la salud mental.²² En Nueva Zelanda no existe un encuadre estandarizado para realizar investigaciones legales sobre salud mental después de un homicidio,²³ lo mismo que ocurre en España. En nuestro país hay, además, sentencias dispares del Tribunal Supremo sobre el procesamiento penal de los delincuentes con patologías mentales.

Para complicar más la cuestión, es probable que exista un fenotipo criminalmente persistente caracterizado: a) Por trastornos del desarrollo neurológico

19 Un informe, en especial si no es expresamente jurídico, puede tener distinto valor probatorio ante un tribunal. En sentido médico-científico estricto, “informe” es el documento que analiza y explica de forma objetiva e imparcial unos hechos o circunstancias desde la perspectiva técnica. Para la Justicia un “dictamen” es, generalmente, la opinión de un perito experto acerca del contenido de algún informe previo.

20 GUIVARCH, J., PIERCECCHI-MARTI, M.D., GLEZER, D., CHABANNES, J.M. Divergences dans l’expertise psychiatrique de responsabilité: bilan et premières hypothèses à travers une revue de la littérature. *Encephale*. 2015;41(3):244–50.

21 FARTO-PIAY, T. El enju[i]ciamiento penal de las personas con problemas de salud mental. *Estud Penales Crimin*. 2021;41:895–939.

22 DAVIDSON, F., HEFFERNAN, E., GREENBERG, D., WATERWORTH, R., BURGESS, P. Mental health and criminal charges: Variation in diversion pathways in Australia. *Psychiatr Psychol Law*. 2017;24(6):888–98.

23 NG, L., MERRY, S., PATERSON, R., MERRY, A.F. Mental health inquiries in the case of homicide. *Psychiatr Psychol Law*. 2020;27(5):894–911.

y del comportamiento de inicio temprano; b) Diversas adversidades infantiles; y c) Trastornos mentales secundarios al uso de sustancias.^{24,25,26} Ha de tenerse en muy cuenta que la biología, la medicina y la genética son auxiliares de la Justicia. En particular, en el contexto genómico el internacional *Human Genome Project* ha significado un paso trascendental en la historia de la ciencia aplicada.²⁷

La interacción genes-ambiente juega, en efecto, un papel crítico e indudable en cómo se manifiestan y desarrollan muchos trastornos mentales.^{28,29} Algunos autores, en consecuencia, plantean la pregunta: ¿puede la neurociencia revolucionar próximamente la responsabilidad penal? En todo caso, es hora de comenzar a abordar el uso mejorado de la neurociencia en cualesquiera sistemas de justicia penal.^{30,31,32}

De otra parte, resulta actualmente retador garantizar la participación efectiva de los menores de edad implicados en procesos legales.³³ También resulta complejo valorar correctamente el asunto del maltrato de ancianos. Todos estos casos suelen

24 BERTOLÍN-GUILLÉN, J.M., PORCEL-TORRENS, A. Mental health: Stigma, language and nosology. *OSP J Health Car Med.* 2021;2(2):1-6.

25 BERTOLÍN-GUILLÉN, J.M. Current state of psychopharmacology, psychotherapies and other interventions in mental health problems and disorders. *Eur J Appl Sci.* 2021;9(5):251-61.

26 KRONA, H., ANCKARSÄTER, H., NILSSON, T., HOFVANDER, B. Patterns of lifetime criminality in mentally disordered offenders - Findings from a nationally representative cohort. *Front Psychiatry.* 2021;12:564171.

27 El *Human Microbiome Project*, iniciado en 2008 en EE.UU., es una extensión del *Human Genome Project*. Este último cristalizó en 2003 con la secuenciación completa del genoma humano.

28 Véanse las importantes aportaciones del *Psychiatric Genomics Consortium*, que perfilan el mapa genético más amplio conocido hasta ahora sobre los trastornos mentales y del comportamiento.

29 CROSS-DISORDER GROUP OF THE PSYCHIATRIC GENOMICS CONSORTIUM. Genomic relationships, novel loci, and pleiotropic mechanisms across eight psychiatric disorders. *Cell.* 2019;179(7):1469-82.e11.

30 FARAHANY, N.A. Neuroscience and behavioral genetics in US criminal law: An empirical analysis. *J Law Biosci.* 2016 Jan 14;2(3):485-509.

31 BIGENWALD, A., CHAMBON, V. Criminal responsibility and neuroscience: No revolution yet. *Front Psychol.* 2019;10:1406.

32 STEVENS, G.P. 'My brain made me do it?' Reflections on the role of neuroscience in assessing criminal responsibility - A south african medico-legal perspective. *Psychiatr Psychol Law.* 2020;27(2):202-13.

33 LIMANTÉ, A., VAIČIŪNIENĖ, R., APOLEVIČ, J. Child-friendly legal aid and individual assessment of children in conflict with the law: Building the basis for effective participation. *Int J Environ Res Public Health.* 2021;19(1):17.

requerir respuestas integradas de los servicios sociales, medicina, derecho civil y justicia penal.³⁴ Por lo que respecta a la salud en general y la mental en particular, la totalidad de las respuestas sanitarias profesionales habrían de ser con preferencia técnica y oficialmente superiores y especializadas.

Un número considerable de pacientes con patologías médicas generales o específicamente psicopatologías carece de la adecuada capacidad para tomar decisiones acerca de su mejor evaluación y tratamiento propios.³⁵ Por tanto, no siempre será esperable la colaboración de todas las personas peritadas judicialmente. En consecuencia lógica, en la interacción del ámbito jurídico con el sanitario será particularmente importante la máxima calidad de las intervenciones de todos los trabajadores de la salud y en concreto de la salud mental.³⁶

Los tratamientos judicializados, y por tanto obligatorios, de las personas afectas de ciertos trastornos mentales contribuyen a garantizar los derechos fundamentales del usuario. Así se cumple correctamente la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (art. 12: 1,2,4), de la Organización de las Naciones Unidas, ratificada por España en abril de 2006. Dicha convención ha motivado la actual Ley 8/2021, de 2 de junio, en vigor desde septiembre, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (BOE-A-2021-9233).

Por la importante Ley nacional recién comentada se han sustituido los procesos de modificación de la capacidad por los dirigidos a proveer de apoyos a las personas con discapacidad, y se han eliminado la tutela y la patria potestad prorrogada. La llamada prodigalidad no tiene ya una regulación legal propia. En consecuencia, las personas con discapacidad serán quienes, a partir de ahora, hayan de tomar las decisiones que les afecten. Se priorizan las voluntades anticipadas y la curatela, así como la jurisdicción voluntaria en el ámbito procesal. Ya no se incapacitará judicialmente al sujeto, sino que se establecerán

34 DION, S., GOGIA, K., ELMAN, A., CLARK, S., ULREY, P., CONNOLLY, M.T., et al. Developing a rigorous, systematic methodology to identify and categorize elder mistreatment in criminal justice data. *J Elder Abuse Negl.* 2020;32(1):27-45.

35 LEPPING, P., STANLY, T., TURNER, J. Systematic review on the prevalence of lack of capacity in medical and psychiatric settings. *Clin Med (Lond).* 2015;15(4):337-43.

36 van GINNEKEN, N., CHIN, W.Y., LIM, Y.C., USSIF, A., SINGH, R., SHAHMALAK, U., et al. Primary-level worker interventions for the care of people living with mental disorders and distress in low- and middle-income countries. *Cochrane Database Syst Rev.* 2021;8(8):CD009149.

medidas de apoyo para complementarle y que pueda ejercer así su capacidad jurídica.³⁷

En general, los factores predictivos más importantes para reincidir criminalmente suelen ser el número de condenas previas, edad, tipo de delito inicial, diversidad de los antecedentes penales y abuso de sustancias.³⁸ Resultará relevante poder identificar a los delincuentes cuyo *modus operandi* sea indicativo de experiencia criminal.³⁹ Por lo que respecta a la edad, parece que, efectivamente, los criminales más jóvenes tienen mayor tasa de reincidencia.⁴⁰ Probablemente es también una realidad que el abuso y maltrato infantil son problemas tan significativos como generalizados.

De otra parte, hay estudios que subrayan la importancia de la preparación y gestión integral de la libertad condicional de los delincuentes afectados de patologías mentales.⁴¹ Se ha opinado que es conveniente implementar en algunos casos la denominada Terapia Familiar Funcional. Esta terapia se ocupa de las relaciones y dinámicas dentro del grupo familiar para personas en situación de riesgo con edades entre 11-18 años.⁴²

Como síntesis de este subapartado, resultan bastante delicados y variados los hechos jurídicos relacionados con discapacitados mentales, presuntos o reales, lo que requiere la óptima experiencia y especialización oficial sanitaria superior de los peritos facultativos que intervengan. Por otro lado, la definición y alcance de los análisis psiquiátrico y psicológico-clínico forenses no están claros por completo, ni son necesariamente igual de válidos y trascendentes para la Justicia. Es necesaria la colaboración y la coordinación más adecuada entre

37 Se puede ver en el Codi Civil de Catalunya i Legislació Complementària (Decreto Ley 19/2021, de 31 de agosto) la adaptación a la nueva y obligada reforma para toda España del procedimiento de modificación judicial de la capacidad y que data del mismo año.

38 PFLUEGER, M.O., FRANKE, I., GRAF, M., HACHTEL, H. Predicting general criminal recidivism in mentally disordered offenders using a random forest approach. *BMC Psychiatry*. 2015;15:62.

39 CHOPIN, J., PAQUETTE, S., BEAUREGARD, E. Is there an "expert" strangerapist? *Sex Abuse*. 2022;34(1):78-105.

40 SCHAFFNER, D., WEBER, M., KOCHUPARACKAL, T., GRAF, M., HACHTEL, H. Long-term recidivism of mentally disordered offenders considered "dangerous to the public" in Switzerland. *Front Psychiatry*. 2021;12:639936.

41 STEMPKOWSKI, M. Professionalising release management for mentally disordered perpetrators: Benefits in terms of recidivism rates-Results from a study within the Austrian prison system. *Crim Behav Ment Health*. 2020;30(6):312-20.

42 TURNER, C.W., ROBBINS, M.S., EARLY, K.W., BLANKENSHIP, J.L., WEAVER, L.R. Juvenile justice risk factors and functional family therapy fidelity on felony recidivism. *Crim Justice Behav*. 2019;46(5):697-717.

las Administraciones de Justicia y de Sanidad. Esa colaboración es y seguirá siendo un elemento instrumental favorecedor del principio de eficacia que ayude a prevenir y evitar incidencias judiciales negativas.^{43,44}

3.3 Intrusismo profesional en la conjunción entre salud mental y derecho

Por todo lo dicho hasta ahora se hace necesario detectar y evitar el intrusismo sanitario profesional (art. 36 de la Constitución española) en los medios jurídicos y judiciales relacionados.⁴⁵ En lo que atañe a los funcionarios médicos forenses, tal como hemos comentado principalmente en el subapartado III.1. no podrá haber por su parte legalmente intrusismo si solo ejercen en el ámbito judicial y no en el de la salud.

Naturalmente, el Estado no puede garantizar la formación real de los titulados, sino únicamente establecer las condiciones necesarias para la obtención del aprendizaje pertinente. Esto ya se tiene actualmente en cuenta, por ejemplo, para la necesaria especialización en psiquiatría en las plazas homónimas de las pruebas selectivas del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria del Ministerio de Interior.⁴⁶ En efecto, en este caso concreto de funcionarios judiciales de carrera, al referirse específicamente a la sanidad penitenciaria son también de aplicación los requisitos exigidos por el Ministerio Sanidad para la formación facultativa especializada, en conjunto con los requisitos del Ministerio de Justicia.

En el derecho penal positivo (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal) el delito de intrusismo viene regulado en el título XVIII, de las falsedades, en particular en su capítulo V, art. 403, según la nueva redacción de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. El intrusismo ocasional o continuado, entendido como falsedad personal, lo comete el que realizare actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido de acuerdo con la

43 ORTIZ-HERNÁNDEZ, A., CORRAL-GALLEGO, M. De los límites a los principios generales de actuación administrativa en el acceso a los datos de salud. *Derecho y Salud*. 2018;28 (Extraordinario XXVII Congreso, Comunicaciones):168-76.

44 Véase, entre otras normas, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y el RD 355/2014, de 16 de mayo, por el que se crea y regula el órgano consultivo nacional llamado Consejo Médico Forense, en particular la función 3b de su art. 3.

45 QUINTERO-OLIVARES, G. El intrusismo en las especialidades médicas. V Congreso Nacional de Derecho Sanitario. Madrid, ES: Asociación Española de Derecho Sanitario; 1998.

46 Puede consultarse la respectiva Resolución 16549 de la Subsecretaría, de 6 de octubre de 2021.

legislación vigente. Recordemos que los másteres, los listados o reconocimientos colegiales de supuestos especialistas, expertos u otros, no equivalen en términos de salud a los títulos oficiales estatales.

Cualquier sujeto incurrirá en falsedad cuando se presente como lo que no es y, más en concreto, si lo hace como especialista sanitario oficial en una determinada materia, rango o campo, pero sin serlo. También el que realizare los actos propios de una profesión sanitaria que exija el título acreditativo de una determinada capacidad y especialidad debidamente reconocida por el Estado, pero sin poseer esa garantía.

El intrusismo, en tanto delito que intenta sancionar la impericia técnica, ocurre por la simple actividad, es decir, que se consume por el mero desarrollo de la actuación sin necesidad de que acontezca resultado lesivo alguno.⁴⁷ No obstante, como hemos señalado también en el subapartado III.1., cualquier tribunal judicial, que tendrá sus propios criterios y requisitos en su ámbito, en la actualidad puede reconocer como perito sanitario especialista a quien no esté avalado así por el Estado, que es quien determina los títulos oficiales de las especialidades de la salud.

Pueden consultarse al respecto, entre otras normas legales: 1) El RD 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en ciencias de la salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada. El catálogo de especialidades contenido en el apartado 1 de su anexo I ha sido actualizado por el RD 689/2021. 2) El RD 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales. Y 3) La Orden 7023 de 12 de marzo de 1987 (BOE-A-1987-7023) por la que se dictan instrucciones en materia de expedición y homologación de títulos oficiales españoles acreditativos de una especialización.

Otra cuestión potencialmente importante relacionada con el intrusismo es cuanto se refiere al empleo en salud mental de disciplinas como el yoga, el *coaching*, la meditación, la acupuntura y otras, por parte de personas no sanitarias o por sanitarios no especialistas adecuados y oficiales. Enfatizamos nuevamente, además, que la psicología en general es o debiera ser una ciencia aplicada, más aún si se trata específicamente de la psicología clínica, que es una especialidad de las ciencias de la salud. Y no hay dudas de que tanto la medicina en general como la psiquiatría en particular sí que son aplicaciones convenientes del conocimiento científico actualizado.

47 BERTOLÍN-GUILLÉN, J.M. Delitos en el ámbito de la salud mental. *Gac Int Cienc Forense*. 2022; [12](43):20-8.

En la práctica, si todas las disciplinas mencionadas en el párrafo anterior que no son sanitarias u otras semejantes se centran simplemente en el bienestar como legítima aspiración humana no entrarán en colisión, en absoluto, con el concepto de salud entendido como ausencia de enfermedad o trastorno.⁴⁸ En realidad, la diferencia y los conflictos ocurrirán cuando lo que se pretenda sea tratar o curar aplicando un seudotratamiento o supuesta acción terapéutica que no esté reconocida por la comunidad científica y la autoridad sanitaria competente.

El *coaching* en particular es una práctica de desarrollo personal,⁴⁹ relacionada en algún aspecto, pero independiente, del campo formal de la psicología, sea esta general no sanitaria, general sanitaria, o sanitaria especializada en clínica. Aborda genéricamente las emociones, actitudes e intereses del sujeto, lo que es limitrofe con el más técnico campo psicológico, pero en ningún caso con el psicopatológico.

En relación con el intrusismo terapéutico, algo similar puede decirse respecto a la igualmente popular conciencia plena o *mindfulness*,⁵⁰ así como otros entrenamientos cuando se pretenda emplearlos de manera profana como si fueran o equivalieran a terapias psíquicas o psicoterapias. Recordemos asimismo, para terminar con esta cuestión, que toda acción terapéutica, sea o no biológica, requiere invariablemente del explícito consentimiento informado,^{51,52,53,54} lo que tampoco sucede con las abundantes seudoterapias al uso.

48 Véase la definición de "salud" de la OMS, (*Official Records of the World Health Organization*, N.º 2, p. 100), en vigor desde 1948. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85573/Official_record2_eng.pdf;jsessionid=042C17425B455B55208CB3C9E2A3110C?sequence=1

49 COLILLA-RUBIO, P. El coaching ejecutivo, corporativo y organizativo. En: Dolan SL. Más coaching por valores. Cómo alcanzar el éxito en la vida de los negocios y en el negocio de la vida. Madrid, ES: Lid editorial; 2019. pp. 104-5.

50 BERTOLÍN-GUILLÉN, J.M. Full awareness or mindfulness in the practice of current clinical psychology and psychiatry: Explanatory contributions. *Ann Psychiatr Treatm*. 2019;3(1):3-10.

51 Ibid. BERTOLÍN-GUILLÉN, J.M. Las especialidades facultativas del ámbito de la salud mental ante los tribunales de justicia. *Gac Int Cienc For*. 2021;[11](40):33-42.

52 Ibid. BERTOLÍN-GUILLÉN, J.M. Psicoterapias en la psicología clínica y psiquiatría actuales en España. *Rev Psiquiatr Salud Ment (Barc)*. 2020.

53 Ibid. BERTOLÍN-GUILLÉN, J.M., PORCEL TORRENS, A. Mental health: Stigma, language and nosology. *OSP J Health Car Med*. 2021;2(2):1-6.

54 BERTOLÍN-GUILLÉN, J.M. Informed consent and mental health, mainly in Spain, EU. *Inter J Psychiat Ment Health*. 2020;2(1):1-7.

Otros asuntos de importancia relacionados específicamente con la conjunción sanidad-tribunales de justicia son la deontología y confidencialidad para un determinado ejercicio sanitario profesional, se trate o no de una actividad laboral reglada. Ambas cuestiones afectan y obligan a todas las hasta aquí referidas modalidades de intervención,⁵⁵ en especial si son formalmente del campo de la salud. Resulta esencial, en resumen, mejorar en España y otros países de la UE la formación de los profesionales relacionados con la imbricación de la salud mental y la justicia,⁵⁶ máxime si además fueran personal sanitario titulado superior, es decir, facultativo.

4. CONCLUSIONES

En los delitos cometidos por presuntos discapacitados debido a alteraciones o anomalías psíquicas graves existen sentencias dispares del Tribunal Supremo español. Garantizar los derechos constitucionales del sujeto pasivo convierte en complejo tanto el enjuiciamiento penal de los discapacitados mentales, como su eventual remisión al oportuno procedimiento civil u otro.

Las intervenciones periciales forenses médico-psiquiátricas y psicológico-clínicas, aunque no son vinculantes tienen importante trascendencia en los procedimientos judiciales. Es a señalar que en el Sistema Nacional de Salud español normalmente no puede haber intrusismo que, siendo conocido, sea también aceptado.

Para la valoración probatoria del dictamen pericial el juez o tribunal podrá de modo incidental aceptar o reprobar justificadamente a los peritos, sean o no especialistas sanitarios titulados oficiales. En particular, los peritos facultativos que emitan dictamen o pronunciamiento pericial a petición de una parte solo podrán ser tachados o reprobados, pero no recusados.⁵⁷

Las periciales psíquicas y el derecho están destinados a entenderse. Para el campo concreto de la salud mental, hemos propuesto hasta aquí de manera documentada y argumentada que sería muy recomendable considerar mejor la formación y

55 BERTOLÍN-GUILLÉN, J.M. Deontología y confidencialidad en psiquiatría y psicología clínica en España. *Rev Bioet Der.* 2021;[23](52):173–83.

56 FOVET, T., THIBAUT, F., PARSONS, A., SALIZE, H.J., CAMILLE, P.T., THOMAS, P., LANCELEVÉE, C. Mental health and the criminal justice system in France: A narrative review. *Forensic Sci Int Mind Law.* 2020;(1):100028.

57 Ver los arts. 124, 343 y 344 de la LEC y el art. 219 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con última actualización publicada el 15/12/2021.

adiestramiento oficial exigible a todos los facultativos de la salud, sean funcionarios médicos forenses o peritos judiciales variados. Para la óptima evaluación y diagnóstico psicopatológico de cualquier persona ante la Administración de Justicia ha de exigirse, por tanto, la máxima cualificación profesional específica reconocida por el Estado.

5. BIBLIOGRAFÍA

- BERTOLÍN-GUILLÉN, J.M. “Full awareness or mindfulness in the practice of current clinical psychology and psychiatry: Explanatory contributions.” *Annals of Psychiatry and Treatment*, vol. 3, núm. 1, 2019, pp. 3–10. <https://doi.org/10.17352/apt.000010>
- BERTOLÍN-GUILLÉN, J.M. “Psicoterapias en la psicología clínica y psiquiatría actuales en España.” *Revista de Psiquiatría y Salud Mental (Barc.)*, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.rpsm.2020.01.004>
- BERTOLÍN-GUILLÉN, J.M. “Informed consent and mental health, mainly in Spain, EU.” *International Journal of Psychiatry and Mental Health*, vol. 2, núm. 1, 2020, pp. 1–7. <https://doi.org/10.36811/ijpmh.2020.110007>
- BERTOLÍN-GUILLÉN, J.M. “Deontología y confidencialidad en psiquiatría y psicología clínica en España.” *Revista de Bioética y Derecho*, [vol. 23], núm. 52, 2021, pp. 173–83. <https://doi.org/10.1344/rbd2021.52.32034>
- BERTOLÍN-GUILLÉN, J.M. “Current state of psychopharmacology, psychotherapies and other interventions in mental health problems and disorders.” *European Journal of Applied Sciences*, vol. 9, núm. 5, 2021, pp.: 251–61. <https://journals.scholarpublishing.org/index.php/AIVP/article/view/10994>
- BERTOLÍN-GUILLÉN, J.M. “Las especialidades facultativas del ámbito de la salud mental ante los tribunales de justicia.” *Gaceta Internacional de Ciencias Forenses*, [vol. 11], núm. 40, 2021, pp. 33–42. https://www.uv.es/gicf/4A2_Bertolin_GICF_40.pdf
- BERTOLÍN-GUILLÉN, J.M., PORCEL-TORRENS, A. “Mental health: Stigma, language and nosology.” *OSP Journal of Health Care and Medicine*, vol. 2, núm. 2, 2021, pp. 1–6. <https://www.ospublishers.com/Mental-Health-Stigma,-Language-and-Nosology.html>

- BERTOLÍN-GUILLÉN, J.M. “Delitos en el ámbito de la salud mental.” *Gaceta Internacional de Ciencias Forenses*, [vol. 12], núm.43, 2022, pp. 20–8. https://www.uv.es/gicf/3R1_Bertolin_GICF_43.pdf
- BIGENWALD, A., CHAMBON, V. “Criminal responsibility and neuroscience: No revolution yet.” *Frontiers in Psychology*, vol. 10, 2019, p. 1406 y ss. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01406>
- CHOPIN, J., PAQUETTE, S., BEAUREGARD, E. “Is there an “expert” stranger rapist?” *Sex Abuse*, vol. 34, núm. 1, 2022, pp. 78–105. <https://doi.org/10.1177/1079063221993478>
- COLILLA-RUBIO, P. “El coaching ejecutivo, corporativo y organizativo.” En: DOLAN, S.L. *Más coaching por valores. Cómo alcanzar el éxito en la vida de los negocios y en el negocio de la vida*. Madrid, ES, Lid editorial; 2019. pp. 104–5.
- CROSS-DISORDER GROUP OF THE PSYCHIATRIC GENOMICS CONSORTIUM. “Genomic relationships, novel loci, and pleiotropic mechanisms across eight psychiatric disorders.” *Cell*, 2019; vol. 179, núm. 7, 2019, pp. 1469–82.e11. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.11.020>
- DAVIDSON, F., HEFFERNAN, E., GREENBERG, D., WATERWORTH, R., BURGESS, P. “Mental health and criminal charges: Variation in diversion pathways in Australia.” *Psychiatry, Psychology and Law*, vol. 24, núm. 6, 2017, pp. 888–98. <https://doi.org/10.1080/13218719.2017.1327305>
- DION, S., GOGIA, K., ELMAN, A., CLARK, S., ULREY, P., CONNOLLY, M.T, et al. “Developing a rigorous, systematic methodology to identify and categorize elder mistreatment in criminal justice data.” *Journal of Elder Abuse & Neglect*, vol. 32, núm. 1, 2020, pp. 27–45. <https://doi.org/10.1080/08946566.2020.1733725>
- FARAHANY, N.A. “Neuroscience and behavioral genetics in US criminal law: An empirical analysis.” *Journal of Law and the Biosciences*, vol. 2, núm. 3, 2016, pp. 485–509. <https://doi.org/10.1093/jlb/lsv059>
- FARTO-PIAY, T. “El enju[i]ciamiento penal de las personas con problemas de salud mental.” *Estudios Penales y Criminológicos*, vol. 41, 2021, pp. 895–939. <https://doi.org/10.15304/epc.41.7311>
- FOVET, T., THIBAUT, F., PARSONS, A., SALIZE, H.J., CAMILLE, P.T., THOMAS, P., LANCELEVÉE, C. “Mental health and the criminal justice system in France: A narrative review.” *Forensic Science International: Mind and Law*, vol. 1, 2020, p. 100028 y ss. <https://doi.org/10.1016/j.fsimpl.2020.100028>
- GARCÍA-MILLÁN, A. “El valor probatorio de la historia clínica como documento público.” *Derecho y Salud*, vol. 29, núm. 1, 2019, pp. 145–54. https://www.ajs.es/sites/default/files/2020-05/vol29n1_02_04_Estudio.pdf
- GBD 2019 MENTAL DISORDERS COLLABORATORS. “Global, regional, and national burden of 12 mental disorders in 204 countries and territories, 1990–2019: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019.” *The Lancet Psychiatry*, vol. 9, núm. 2, 2022, pp. 137–50. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(21\)00395-3](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00395-3)
- GUIVARCH, J., PIERCECCHI-MARTI, M.D., GLEZER, D., CHABANNES, J.M. “Divergences dans l’expertise psychiatrique de responsabilité: bilan et premières hypothèses à travers une revue de la littérature.” *L’Encéphale*, vol. 41, núm. 3, 2015, pp. 244–50. <https://doi.org/10.1016/j.encep.2015.03.002>
- HAJEK, A., BOCK, J.O., KÖNIG, H.H. “Association of general psychological factors with frequent attendance in primary care: A population-based cross-sectional observational study.” *BMC Family Practice*, vol. 18, 2017, p. 48 y ss. <https://doi.org/10.1186/s12875-017-0621-5>
- KRAVCHUK, O., NALUTSYSHYN, V., BALAN, M., OSMOLIAN, V., DOMBROVSKA, E. “Правовой статус эксперта-психиатра при производстве судебно-психиатрической экспертизы. Медицинские Новости Грузии.” [El estatus legal de un perito psiquiatra durante una pericia psiquiátrica forense.] *Georgian Medical News*, núm. 319, 2021, pp. 152–60. <https://europepmc.org/article/med/34749342>
- KRONA, H., ANCKARSÄTER, H., NILSSON, T., HOFVANDER, B. “Patterns of lifetime criminality in mentally disordered offenders - Findings from a nationally representative cohort.” *Frontiers in Psychiatry*, vol. 12, 2021, p. 564171 y ss. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2021.564171>

- LEPPING, P., STANLY, T., TURNER, J. “Systematic review on the prevalence of lack of capacity in medical and psychiatric settings.” *Clinical Medicine (Lond.)*, vol. 15, núm. 4, 2015, pp. 337–43. <https://doi.org/10.7861/clinmedicine.15-4-337>
- LIMANTÈ, A., VAIČIŪNIENÈ, R., APOLEVIČ, J. “Child-friendly legal aid and individual assessment of children in conflict with the law: Building the basis for effective participation.” *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 19, núm. 1, 2021, p. 17 y ss. <https://doi.org/10.3390/ijerph19010017>
- NG, L., MERRY, S., PATERSON, R., MERRY, A.F. “Mental health inquiries in the case of homicide.” *Psychiatry, Psychology and Law*, vol. 27, núm. 5, 2020, pp. 894–911. <https://doi.org/10.1080/13218719.2020.1751329>
- NIVEAU G, WELLE I. “Forensic psychiatry, one subspecialty with two ethics? A systematic review”. *BMC Medical Ethics*, vol. 19, núm. 1, 2018, p. 25 y ss. <https://doi.org/10.1186/s12910-018-0266-5>
- ORTIZ-HERNÁNDEZ, A., CORRAL-GALLEGO, M. “De los límites a los principios generales de actuación administrativa en el acceso a los datos de salud.” *Derecho y Salud*, vol. 28 (Extraordinario XXVII Congreso, Comunicaciones), 2018, pp. 168–76. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6938159>
- PFLUEGER, M.O., FRANKE, I., GRAF, M., HACHTEL, H. “Predicting general criminal recidivism in mentally disordered offenders using a random forest approach.” *BMC Psychiatry*, vol. 15, 2015, p. 62 y ss. <https://doi.org/10.1186/s12888-015-0447-4>
- QUINTERO-OLIVARES, G. “El intrusismo en las especialidades médicas.” V Congreso Nacional de Derecho Sanitario. Madrid, ES, Asociación Española de Derecho Sanitario, 1998. https://www.aeds.org/congreso/congresos-aeds/congreso5_4.php
- REDACCIÓN INFOCOPONLINE. “Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. La licenciatura en psicología es una profesión sanitaria. Sinopsis.” *Infocoponline*, núm. 26, 2006. <https://www.cop.es/infocop/vernumeroCOP.asp?id=1310>
- SCHAFFNER, D., WEBER, M., KOCHUPARACKAL, T., GRAF, M., HACHTEL, H. “Long-term recidivism of mentally disordered offenders considered “dangerous to the public” in Switzerland.” *Frontiers in Psychiatry*, vol. 12, 2021, p. 639936 y ss. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.639936>
- STEMPKOWSKI, M. “Professionalising release management for mentally disordered perpetrators: Benefits in terms of recidivism rates-results from a study within the Austrian prison system.” *Criminal Behaviour and Mental Health*, vol. 30, núm. 6, 2020, pp. 312–20. <https://doi.org/10.1002/cbm.2179>
- STEVENS, G.P. ““My brain made me do it?” Reflections on the role of neuroscience in assessing criminal responsibility - A south african medico-legal perspective.” *Psychiatry, Psychology and Law*, vol. 27, núm. 2, 2020, pp. 202–13. <https://doi.org/10.1080/13218719.2019.1688131>
- SUBIJANA, I.J., ECHEBURÚA, E. “El conflicto de roles con respecto a la prueba pericial psicológica en el proceso judicial.” *Anuario de Psicología Jurídica*, vol. 32, núm. 1, 2022, pp. 107–14. <https://doi.org/10.5093/apj2021a22>
- TURNER, C.W., ROBBINS, M.S., EARLY, K.W., BLANKENSHIP, J.L., WEAVER, L.R. “Juvenile justice risk factors and functional family therapy fidelity on felony recidivism.” *Criminal Justice and Behavior*, vol. 46, núm. 5, 2019, pp. 697–717. <https://doi.org/10.1177/0093854818813184>
- VAN GINNEKEN, N., CHIN, W.Y., LIM, Y.C., USSIF, A., SINGH, R., SHAHMALAK, U., et al. “Primary-level worker interventions for the care of people living with mental disorders and distress in low- and middle-income countries.” *Cochrane Database of Systematic Reviews*, vol. 8, núm. 8, 2021, p. CD009149 y ss. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD009149.pub3>